

## El imperialismo humanitario. La nueva doctrina de derecho imperial

Noam Chomsky

**E**l concepto de «imperialismo humanitario» de Jean Bricmont capta de manera concisa una disyuntiva a la que se vieron abocados los líderes occidentales y la comunidad intelectual occidental a partir del hundimiento de la Unión Soviética. Desde el comienzo mismo de la Guerra Fría se contó con una justificación racional para todo recurso a la fuerza y al terror, a la subversión y al estrangulamiento económico, a saber, que todas esas acciones se emprendían en defensa de lo que John F. Kennedy llamó la «monolítica e implacable conspiración» con base en el Kremlin (o a veces en Beijing), una fuerza de inexorable maldad dedicada a extender su brutal dominio en el mundo entero. La fórmula abarcaba prácticamente todo tipo imaginable de intervención, con absoluta independencia de los hechos. Sin embargo, una vez desaparecida la Unión Soviética, o bien había que cambiar de políticas, o bien había que idear nuevas justificaciones. Muy pronto se hizo evidente cuál de los dos caminos se iba a seguir, lo que serviría para arrojar nueva luz tanto sobre lo que antes había sucedido como sobre la base institucional del diseño de políticas.

El final de la Guerra Fría desencadenó un impresionante torrente retórico que aseguraba al mundo que Occidente estaría en adelante en plena disposición para llevar adelante su tradicional dedicación a la libertad, la democracia, la justicia y los derechos humanos, sin el obstáculo que suponía la rivalidad de una superpotencia, aunque había quienes —los llamados «realistas» en la teoría de las relaciones internacionales— advertían de que «conceder al idealismo el dominio prácticamente exclusivo de nuestra política exterior» podría llevarnos demasiado lejos y perjudicar nuestros intereses.<sup>1</sup> Poco después, ideas tales como las de «intervención humanitaria» y «responsabilidad de proteger» se convirtieron en rasgos distintivos del discurso político occidental, que en general se describía como el establecimiento de una «nueva norma» en los asuntos internacionales.

---

• Artículo publicado en *MR*, vol. 60, nº 4. Traducción de Marco Aurelio Galmarini. Noam Chomsky es profesor de lingüística en el Massachusetts Institute of Technology. Sus libros más recientes son *Intervenciones*, Siglo XXI, 2007; *Estados fallidos*, Ediciones B, 2007 y *Líbano desde dentro*, Hacer, 2008. Este ensayo es una adaptación de la Introducción a Jean Bricmont, «*Humanitärer*» *Imperialismus*, Berlín, Kai Homilius, cuya versión inglesa ha sido editada por Monthly Review con el título *Humanitarian Imperialism: Using Human Rights to Sell War*.

El milenio tocó a su fin en medio de un extraordinario despliegue de autocomplacencia de los intelectuales occidentales, admirados ante el espectáculo del «nuevo mundo idealista» que, «dispuesto a poner fin a la inhumanidad», había inaugurado una «noble fase» de su política exterior con «brillo de santidad» puesto que, por primera vez en la historia, un Estado se consagraba a «principios y valores» y actuaba como líder de los «estados ilustrados» movido únicamente por el «altruismo» y el «fervor moral» y, por tanto, con libertad para emplear la fuerza allí donde sus líderes «creyeran que es justo», todo lo cual es sólo un pequeño ejemplo de la avalancha de respetadas voces liberales.<sup>2</sup>

Varias preguntas vienen de inmediato a la mente. En primer lugar, ¿cómo armonizar esa imagen propia con la historia anterior al final de la Guerra Fría? Si eso resulta imposible, ¿por qué razón habría de esperarse esa súbita decisión de «conceder al idealismo el control prácticamente exclusivo de nuestra política exterior», o simplemente algún control, por mínimo que fuese? ¿Y cómo cambió realmente la política exterior con la desaparición de la superpotencia enemiga? Una pregunta incluso previa es si tales consideraciones deberían siquiera plantearse.

Hay dos puntos de vista sobre el significado de los hechos registrados en la historia. La actitud de quienes aplauden las «nuevas normas» se expresa claramente en la voz de uno de sus más distinguidos estudiosos y defensores, el profesor de relaciones internacionales Thomas Weiss, para quien cualquier examen crítico de los hechos mencionados no es más que «eslóganes e insultos a la política exterior históricamente malvada de Washington», por lo cual es «fácil ignorarlos».<sup>3</sup>

Una actitud contraria considera que las decisiones políticas derivan sustancialmente de las estructuras institucionales y, puesto que estas no han variado, el examen de la historia nos proporciona una valiosa comprensión de esas «nuevas normas» y del mundo contemporáneo. Esa es la actitud que adopta Bricmont en su estudio sobre «la ideología de los derechos humanos» y que yo mismo adoptaré en lo que sigue.

No hay aquí espacio para una revisión de la historia, sino únicamente para ilustrar, limitándonos al gobierno de Kennedy, la extrema izquierda liberal del espectro, que contaba entonces con un número inusualmente elevado de intelectuales liberales en posiciones clave de la toma de decisiones. En esos años, se apeló a la fórmula estándar que citábamos al inicio para justificar la invasión de Vietnam del Sur en 1962 y así se sentaron las bases de uno de los mayores crímenes del siglo xx.

A aquellas alturas, el régimen clientelar impuesto por Estados Unidos ya no podía controlar la resistencia de los nativos que había provocado un terrorismo de Estado a gran escala que había dado muerte a decenas de miles de personas. Entonces, Kennedy envió a la Fuerza Aérea estadounidense para comenzar el bombardeo regular de Vietnam del Sur, autorizó la utilización de napalm y la guerra química con el fin de destruir tanto las cosechas como la cubierta vegetal e inició los programas que llevaron a millones de campesinos sudvietnamitas a los suburbios urbanos o a campos de concentración en los que se los rodeaba de alambradas de espinos para «protegerlos» de las fuerzas de resistencia sudvietnamitas a las que, como Washington sabía, estos prestaban apoyo. Todo eso para defenderse de los dos grandes Satanes: Rusia y China, o el «eje chino-soviético».<sup>4</sup>

En los dominios tradicionales del poder norteamericano, esa misma fórmula llevó a Kennedy a sustituir la calificación de la misión militar de la misión en Latinoamérica de «defensa hemisférica»—una idea superviviente de la Segunda Guerra Mundial— por la de

«seguridad interna». Las consecuencias fueron inmediatas. En palabras de Charles Maechling —que dirigió la planificación de la contrainsurgencia y la defensa interna de Estados Unidos durante el gobierno de Kennedy y los primeros años del gobierno de Johnson—, la política norteamericana pasó de tolerar «la rapacidad y la crueldad de los militares latinoamericanos» a la «complicidad directa» en sus crímenes y al apoyo norteamericano de «los métodos de los escuadrones de exterminio de Heinrich Himmler».

Un caso decisivo fue la preparación que llevó a cabo el gobierno de Kennedy del golpe militar en Brasil para derrocar al régimen moderadamente socialdemócrata de Goulart. El golpe programado se produjo poco después del asesinato del presidente norteamericano y estableció el primero de una serie de perversos Estados de Seguridad Nacional, además de marcar el inicio de una plaga de represión en todo el continente que se prolongó con las guerras terroristas de Reagan que devastaron América Central en la década de 1980. Con la misma justificación, en 1962 la misión militar de Kennedy en Colombia aconsejó al Gobierno que recurriera a «los paramilitares, el sabotaje y/o las actividades terroristas contra conocidos partidarios del comunismo», acciones que «serían respaldadas por Estados Unidos». En el contexto latinoamericano, la frase «conocidos partidarios del comunismo» se refería a dirigentes socialistas, sacerdotes que organizaban a los campesinos, activistas de derechos humanos, en una palabra, toda persona comprometida con el cambio social en unas sociedades violentas y represoras.

Todos esos principios se incorporaron rápidamente a la formación y la actuación práctica de los militares. Tal como escribió el respetado presidente del Comité Colombiano Permanente de Derechos Humanos, ex ministro de Asuntos Exteriores, Alfredo Vásquez Carrizosa, la Administración Kennedy «hizo grandes esfuerzos para transformar nuestras fuerzas armadas regulares en brigadas antisubversivas, con aceptación de la nueva estrategia de los escuadrones de la muerte», lo cual desembocó en

lo que en Latinoamérica se conoce como Doctrina de Seguridad Nacional, [...] no la defensa contra un enemigo exterior, sino una forma de convertir al *establishment* militar en el amo del juego [con] derecho a combatir contra el enemigo interior, como lo muestran la doctrina brasileña, la argentina, la uruguaya y la colombiana. Se trata del derecho a hacer frente y exterminar a los trabajadores sociales, a los sindicalistas, a los hombres y mujeres que no apoyan el orden establecido y a quienes se supone que son extremistas comunistas. Y eso incluye a cualquiera, incluso a activistas en defensa de los derechos humanos, como es mi caso.

En 2002, una misión de Amnistía Internacional para proteger a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo comenzó con una visita a Colombia, elección que se basaba en el extremado volumen de violencia con apoyo estatal que allí se ejercía, no sólo contra esos valientes activistas, sino también contra dirigentes sindicales, de los que hubo en Colombia más asesinados que en todo el resto del mundo junto, por no hablar de campesinos, indígenas y afrocolombianos, las víctimas más trágicas. Como integrante de la delegación, pude entrevistarme con un grupo de activistas de derechos humanos en la casa de Vásquez Carrizosa en Bogotá, fuertemente custodiada, oír sus dolorosos informes y, más tarde, recibir los testimonios sobre el terreno, experiencia realmente conmovedora.

La misma fórmula sirvió para la campaña de subversión y violencia que sometió Guyana, independiente desde hacía poco, al gobierno del cruel dictador Forbes Burnham. También se apeló a ella para justificar las campañas de Kennedy contra Cuba tras la fallida invasión de Bahía de Cochinos. En su biografía de Robert Kennedy, Arthur Schlesinger, el eminente historiador liberal y asesor de Kennedy, dice que el presidente asignó a su hermano Robert la tarea de llevar a Cuba «los terrores de la tierra» y que este la tomó como su primera prioridad. La campaña terrorista continuó al menos durante la década de 1990, aunque en los últimos años el gobierno norteamericano no llevó a cabo directamente las operaciones terroristas, sino que se limitó a apoyarlas y proporcionar refugio a los terroristas y sus jefes, entre los que destacaban Orlando Bosch, a quien recientemente se unió Luis Posada Carriles. Los comentaristas han sido lo bastante discretos como para no recordarnos la Doctrina Bush: «quienes den amparo a terroristas son tan culpables como los propios terroristas» y deben ser tratados en concordancia, con bombardeos e invasión, doctrina que ha «negado unilateralmente la soberanía de los Estados que proporcionan un santuario a los terroristas», como observa Graham Allison, especialista en asuntos internacionales de Harvard, y que se ha «convertido ya en una regla de facto de las relaciones internacionales», con las excepciones habituales.

Documentos internos de los años de Kennedy-Johnson revelan que una de las cosas que más preocupaban del caso cubano era que este había «desafiado con éxito» las políticas estadounidenses desde la Doctrina Monroe de 1823, que preconizaba el control de Estados Unidos sobre todo el hemisferio (aunque, entonces, aún no pudo hacerse efectivo). Se temía que ese «desafío con éxito» de Cuba, en particular si lo acompañaba un desarrollo independiente afortunado, estimulara a otros países en condiciones comparables a perseguir un camino semejante, versión racional de la teoría del dominó y rasgo persistente de las decisiones políticas. Por esa razón, como revelan los documentos, era necesario castigar severamente a la población civil hasta que terminara por derrocar a tan problemático gobierno.

Acabamos de repasar tan solo una simple muestra de unos pocos años de intervención bajo el Gobierno más liberal de los Estados Unidos, que se justificaba ante el público en términos defensivos. La historia completa no presenta ninguna diferencia importante. Con pretextos similares, la dictadura rusa justificó el férreo control que ejercía sobre su mazmorra de Europa Oriental.

Las razones para la intervención, la subversión, el terror y la represión no son ningún misterio. Han sido precisamente resumidas por Patrice McSherry en un estudio muy cuidadoso de la Operación Cóndor, la operación terrorista internacional instaurada con respaldo norteamericano en el Chile de Pinochet: «Los militares latinoamericanos, que actuaban normalmente con el apoyo del Gobierno norteamericano, derrocaron a Gobiernos civiles y destruyeron otros centros de poder democrático en sus sociedades (partidos, sindicatos, universidades y sectores constitucionalistas de las fuerzas armadas) precisamente cuando la orientación clasista del Estado estaba a punto de cambiar o en proceso de cambio para que el poder del Estado pasara a sectores sociales no elitistas [...] Impedir tales transformaciones del Estado era un objetivo esencial de las élites latinoamericanas, y también los funcionarios norteamericanos lo consideraban de interés vital para la seguridad nacional».<sup>5</sup>

Es fácil demostrar que lo que se denomina «intereses de seguridad nacional» sólo tiene una relación circunstancial con la seguridad de la nación, aunque sí tiene estrecha relación con los intereses de los sectores dominantes en el seno del Estado imperial y con el interés general del Estado de asegurar la obediencia.

Estados Unidos es una sociedad inusualmente abierta. De ahí que no haya dificultad en documentar los principios fundamentales de su estrategia global a partir de la Segunda Guerra Mundial. Incluso antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, hubo planificadores y analistas de alto nivel que llegaron a la conclusión de que, en el mundo de posguerra, Estados Unidos debería tratar de «hacerse con un poder indiscutido» y asegurar la «limitación de cualquier ejercicio de soberanía» de Estados que pudieran interferir en sus objetivos globales. Además, reconocían que el «requisito más importante» para asegurar tales fines era «el rápido cumplimiento de una política integrada para conseguir la supremacía militar y económica de los Estados Unidos». En aquella época, esas ambiciones se limitaban al «mundo no germano», que se organizaría bajo la égida norteamericana como una «Gran Área» que incluiría el hemisferio occidental, el antiguo Imperio británico y el Lejano Oriente. Cuando Rusia rechazó al ejército nazi después de la batalla de Stalingrado, y cada vez quedó más claro que Alemania sería derrotada, dichos planes se extendieron hasta incluir en ellos todo el territorio posible de Eurasia.

Una versión más extrema de esa gran estrategia, prácticamente inmutable, sostiene que no se puede tolerar ningún desafío al «poder, la posición y el prestigio de los Estados Unidos», y son esas las órdenes que recibió la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional [*American Society of International Law*] del prominente estadista liberal Dean Acheson, uno de los principales arquitectos del mundo de posguerra. Acheson pronunciaba esas palabras en 1963, poco después de que la crisis de los misiles pusiera al mundo al borde de una guerra nuclear. Pocos son los cambios de fondo que encontramos en las concepciones básicas cuando abordamos la doctrina de Bush II, que provocó una insólita protesta general, no a causa de su contenido esencial, sino de su estilo desvergonzado y su arrogancia, como señaló la secretaria de Estado de Clinton, Madeleine Albright, quien era plenamente consciente de su analogía con la doctrina de Clinton.

El hundimiento de la «monolítica e implacable conspiración» condujo a un cambio de táctica, pero no de las políticas fundamentales. Los analistas políticos lo entendieron con toda claridad. Dimitri Simes, socio del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, observó que las iniciativas de Gorbachov «liberarían la política exterior estadounidense del corsé que le imponía la hostilidad de la superpotencia». <sup>6</sup> Simes identificó tres factores principales de esa «liberación». En primer lugar, los Estados Unidos estarían en condiciones de transferir los costes de la OTAN a sus competidores europeos, que era una manera de evitar que Europa intentara probar una vía independiente. En segundo lugar, los Estados Unidos podían poner fin a «la manipulación que sobre ellos ejercían las naciones del Tercer Mundo». La manipulación de los ricos por los pobres que no merecen ayuda ha sido siempre un problema serio, particularmente grave en relación con Latinoamérica, que en los cinco años anteriores había transferido unos 150.000 millones de dólares al Occidente industrial, además de los 100.000 millones de fuga de capitales, lo que equivalía a veinticinco veces el valor total de la Alianza para el Progreso y a quince veces el Plan Marshall.

Esa ingente hemorragia forma parte de un complicado sistema por el que los bancos occidentales y las élites latinoamericanas se enriquecen a expensas de la población general de América Latina, que luego carga con la «crisis de la deuda» en que todas esas manipulaciones van a desembocar.

Sin embargo, gracias a la capitulación de Gorbachov, Estados Unidos puede resistirse ahora a «las exigencias injustificadas de asistencia del Tercer Mundo» y adoptar una posición más dura a la hora de hacer frente a «deudores desafiantes del Tercer Mundo».

El tercer factor, y el más importante, de la «liberación», continúa diciendo Simes, es que la decadencia de la «amenaza soviética [...] deja más disponible el poder militar como instrumento de política exterior de Estados Unidos [...] contra quienes se dispongan a desafiar intereses importantes de ese país». En adelante, Estados Unidos no tendrá las manos «atadas» y Washington podrá beneficiarse de «una mayor confianza en la fuerza militar en caso de crisis».

El gobierno de Bush I, entonces en funciones, dejó de inmediato en evidencia que era plenamente consciente de las consecuencias del final de la amenaza soviética. Pocos meses después de la caída del Muro de Berlín, el Gobierno puso en marcha una nueva *Estrategia de Seguridad Nacional*. En el frente interno, llamó al fortalecimiento de «la base industrial de defensa», con la creación de incentivos «para invertir en nuevas instalaciones y equipamientos, así como en investigación y desarrollo». La frase «base industrial de defensa» es un eufemismo para referirse a la economía de la alta tecnología, que descansa de modo decisivo en el dinamismo del sector estatal con el fin de socializar costes y riesgos y, finalmente, privatizar los beneficios unas décadas más tarde, como ocurrió en el caso de los ordenadores e internet. El gobierno sabe perfectamente que la economía de Estados Unidos dista mucho del modelo de mercado libre que se ensalza en la doctrina y se impone a quienes son demasiado débiles para resistirse, tema tradicional de la historia económica que el economista internacional Ha-Joon Chang ha revisado recientemente con gran agudeza.<sup>7</sup>

En el campo internacional, la *Estrategia de Seguridad Nacional* de Bush I reconocía que «lo más probable es que las exigencias de utilización de nuestras fuerzas militares no vengan de la Unión Soviética, sino del Tercer Mundo, donde es posible que se requieran nuevas capacidades y maneras distintas de abordar la situación. Estados Unidos tiene que concentrar la atención en «amenazas de segundo orden, como el terrorismo, la subversión, la insurgencia y el tráfico de drogas, que amenazan al país, a su ciudadanía y sus intereses por vías hasta ahora desconocidas». «Las fuerzas militares han de acomodarse a la severidad del medio, a la inmadurez de la estructura básica y a las importantes variaciones que con frecuencia se encuentran en el Tercer Mundo». «La formación, así como la investigación y el desarrollo, tendrán que sintonizar mejor con las necesidades de los conflictos de baja intensidad», entre los que destaca de modo decisivo la contrainsurgencia en el Tercer Mundo. Una vez desaparecida de escena la Unión Soviética, el mundo «ha pasado de ser un “medio rico en armas” [Rusia] a ser un “medio rico en objetivos” [el Sur]». Estados Unidos, según las previsiones de los planificadores militares, habrá de afrontar «amenazas cada vez más exigentes del Tercer Mundo».

En consecuencia, una vez explicada la *Estrategia de Seguridad Nacional*, los Estados Unidos están obligados a mantener un enorme aparato militar y la capacidad para proyectar su poder en todo el mundo con rapidez, confiando ante todo en las armas nucleares,

que, como exponían los planificadores de Clinton, «proyectan su sombra sobre cualquier crisis o conflicto» y permiten el libre uso de las fuerzas convencionales. El motivo para ello no es ya la amenaza soviética, ahora desaparecida, sino más bien la «creciente sofisticación tecnológica de los conflictos del Tercer Mundo», lo que resulta particularmente cierto en Oriente Medio, donde «las amenazas a nuestros intereses» que han requerido intervención militar directa «no podían atribuirse al Kremlin», a pesar de lo que se ha dicho durante décadas y que ahora, tras la desaparición de la Unión Soviética, resulta inútil decir. En realidad, la «amenaza a nuestros intereses» siempre había sido el nacionalismo autóctono, hecho que a veces se reconoció, como cuando Robert Komer, el artífice de la Fuerza de Despliegue Rápido del presidente Carter (luego Comando Central), que en un primer momento se destinó a Oriente Medio, declaró en 1980 ante el Congreso que su función no era tanto la de resistir un ataque (muy improbable) de la URSS, como la de abordar en todo el mundo la inquietud autóctona y regional, en particular el «nacionalismo radical», que fue siempre una preocupación primordial.

El término «radical» entra en la misma categoría que la expresión «conocidos partidarios del comunismo». No significa *radical*, sino más bien *fuera de nuestro control*. Así, en su momento, Irak no era radical. Por el contrario, Saddam Hussein siguió siendo un amigo favorecido y un aliado mucho después de haber llevado a cabo sus más espantosas atrocidades (Halabja, Al-Anfal y otras) y después del final de la guerra con Irán, para la cual había recibido importante apoyo del Gobierno de Reagan, entre otros. En concordancia con esas cálidas relaciones, en 1989 el presidente Bush invitó a los ingenieros nucleares iraquíes a Estados Unidos para que recibieran una formación avanzada en desarrollo de armas nucleares, y a comienzos de 1990 envió a Irak a una delegación senatorial de alto nivel para que llevara su saludo personal a su amigo Saddam Hussein. La delegación, que estaba encabezada por el líder de la mayoría del Senado, Bob Dole, más tarde candidato presidencial republicano, e incluía a otros senadores prominentes, fue portadora de los saludos personales de Bush y le aconsejó a Hussein que no hiciera caso de las críticas que hubiera podido oír de parte de sectores de la prensa norteamericana irresponsable, además de asegurarle que el Gobierno haría cuanto estuviera en sus manos para poner fin a esas desafortunadas prácticas.

Unos meses después, Saddam Hussein invadió Kuwait, desoyendo órdenes, o tal vez malinterpretando señales ambiguas del Departamento de Estado. Eso era un auténtico crimen, por lo que, de amigo respetado, se convirtió instantáneamente en encarnación del mal.

Resulta aleccionador examinar la reacción estadounidense ante la invasión de Kuwait por Saddam Hussein, tanto el ultraje retórico como la respuesta militar, que fue un golpe devastador a la sociedad civil iraquí y que, sin embargo, dejó firmemente en pie a la tiranía. Los acontecimientos y su interpretación son especialmente reveladores por lo que respecta a la continuidad de las políticas estadounidenses tras el hundimiento de la Unión Soviética y a la cultura intelectual y moral que subyace a dichas políticas.

La invasión de Kuwait por Saddam Hussein en agosto de 1990 fue el segundo caso de agresión militar después de la Guerra Fría. El primero había sido la invasión de Panamá por Bush unas semanas después de la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989. La invasión de Panamá apenas era una nota a pie de página en una larga y sórdida historia, pero se diferenciaba de las acciones anteriores en ciertos aspectos.

Una diferencia fundamental la explicó Elliott Abrams, a la sazón alto funcionario responsable de los asuntos de Oriente Próximo y Norte de África, y encargado posteriormente, con Bush II, de «promover la democracia», en particular en Oriente Medio. Inspirándose en Simes, Abrams observó que «los acontecimientos en Moscú han disminuido la perspectiva de que una pequeña operación alcance la magnitud de un conflicto entre superpotencias».<sup>8</sup> El recurso a la fuerza, como en Panamá, era más factible que antes gracias a la desaparición del poder disuasivo de la Unión Soviética. Análogo razonamiento se aplicó a la reacción a la invasión de Kuwait por parte de Irak. Con la disuasión soviética en vigencia, es poco probable que los Estados Unidos y Gran Bretaña hubieran corrido el riesgo de situar ingentes fuerzas en el desierto y llevar a cabo operaciones militares de tal envergadura.

El objetivo de la invasión de Panamá fue el secuestro de Manuel Noriega, un matonzuelo al que se llevó a Florida y se condenó por narcotráfico y otros delitos, la mayoría de ellos cometidos cuando era empleado de la CIA. Pero Noriega se había vuelto desobediente —por ejemplo, al no apoyar con suficiente entusiasmo la guerra terrorista de Washington contra Nicaragua—, de modo que debía irse. Ya no se podía invocar la amenaza soviética a la manera acostumbrada, de modo que se describió la acción como una defensa de Estados Unidos frente al narcotráfico hispano, abrumadoramente instalado en el dominio de los aliados colombianos de Washington. Mientras presidía la invasión, el presidente Bush anunció nuevos préstamos a Irak para lograr el «objetivo de incrementar las exportaciones norteamericanas y colocarnos en mejor posición para negociar con Irak en relación con su observancia de los derechos humanos», palabras con las que el Departamento de Estado respondió a las escasas preguntas del Congreso, al parecer sin ironía. Los medios de comunicación, prudentemente, prefirieron guardar silencio.

Los agresores victoriosos no investigan sus crímenes, de modo que no se conoce con precisión el precio en víctimas de la invasión de Panamá. Sin embargo, parece que esta fue considerablemente más mortal que la invasión de Kuwait por Saddam Hussein unos meses después. Según los grupos de derechos humanos panameños, el bombardeo estadounidense de los suburbios de El Chorrillo y otros objetivos civiles mataron a varios millares de pobres, muchos más que el precio que se calcula que se cobró la invasión de Kuwait. La cuestión carece de interés en Occidente, pero los panameños no lo han olvidado. En diciembre de 2007, Panamá volvió a declarar un Día de Duelo para conmemorar la invasión de Estados Unidos; en este último país eso apenas si mereció un leve parpadeo.

También ha desaparecido de la historia el hecho de que el mayor temor de Washington cuando Saddam invadió Kuwait era que este imitara la invasión estadounidense de Panamá. Colin Powell, por entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, advirtió que Hussein «se retirará [y dejará allí] a su títere. Todos estarán contentos en el mundo árabe». Por el contrario, cuando Washington se retiró parcialmente de Panamá tras dejar allí a su títere, los latinoamericanos distaban mucho de estar contentos.

La invasión despertó mucha ira en toda la región, a tal punto que el nuevo régimen fue expulsado del Grupo de Ocho Democracias Latinoamericanas, por tratarse de un país sometido a ocupación militar. Washington era consciente, observó Stephen Ropp, un estudioso de temas latinoamericanos, «de que si se retiraba el manto de protección norteamericano, pronto se produciría el derrocamiento civil o militar de Endara y sus



seguidores», es decir, del régimen de banqueros, hombres de negocios y narcotraficantes instalados por la invasión de Bush.

Hasta la propia Comisión de Derechos Humanos del gobierno declaró, cuatro años después, que el derecho del pueblo panameño a la autodeterminación y la soberanía continuaba siendo violado por «el estado de ocupación de un ejército extranjero». El temor de que Hussein imitara la invasión de Panamá parece haber sido la razón principal por la que Washington bloqueó la diplomacia e insistió en la guerra, con la cooperación prácticamente total de los medios de comunicación y, como ocurre con frecuencia, en violación de la opinión pública que, en vísperas de la invasión, apoyaba abrumadoramente la celebración de una conferencia regional para solucionar la confrontación, conjuntamente con otros importantes problemas de Oriente Medio. Esa era en esencia la propuesta de Saddam Hussein en su momento, aunque solo quienes leían publicaciones marginales disidentes o realizaban su propia investigación habrían podido advertirlo.

La preocupación de Washington por los derechos humanos quedó dramáticamente en evidencia en Irak, una vez más, poco después de la invasión, cuando Bush autorizó a Hussein a aplastar una rebelión chií en el sur que probablemente lo habría derrocado. El razonamiento oficial lo resumió Thomas Friedman, por entonces corresponsal diplomático en jefe del *New York Times*. Washington confiaba en instaurar «el mejor de los mundos posibles», explicaba Friedman: «una Junta iraquí con puño de hierro sin Saddam Hussein», que restableciera el statu quo anterior, cuando «el puño de hierro de Hussein mantenía unido a Irak, para gran satisfacción de Turquía y Arabia Saudí, aliadas de Estados Unidos, y, por supuesto, del jefe con sede en Washington. Pero este final feliz resultó imposible, de modo que los señores de la región tuvieron que conformarse con la mejor alternativa, la del mismo «puño de hierro» que habían venido fortaleciendo desde el primer momento. Alan Cowell, veterano corresponsal del *Times* en Oriente Medio, agregó que los rebeldes fracasaron porque «muy poca gente de fuera de Irak quería que ganaran»: Estados Unidos y «sus socios de la coalición árabe» llegaron «con asombrosa unanimidad a la conclusión de que, fueran cuales fueran los pecados del dictador iraquí, este ofrecía a Occidente y a la región una mejor perspectiva de estabilidad para su país que quienes habían sufrido su represión».

El término «estabilidad» se utiliza aquí en su sentido técnico normal: subordinación a la voluntad de Washington. No hay contradicción, por ejemplo, cuando el comentarista liberal James Chace, ex editor de *Foreign Affairs*, explica que Estados Unidos buscó «desestabilizar a un Gobierno marxista libremente elegido en Chile», porque «estábamos decididos a buscar estabilidad» (bajo la dictadura de Pinochet).

Desaparecido el pretexto soviético, la historia de intervenciones criminales siguió casi sin variaciones. Un índice útil es la ayuda militar. Como es bien sabido en los ambientes especializados, la ayuda estadounidense «ha tendido a volcarse desproporcionalmente a favor de los gobiernos latinoamericanos que torturan a sus ciudadanos [...], de los violadores relativamente notables de los derechos humanos fundamentales del hemisferio». Y eso incluye también la ayuda militar; es independiente de la necesidad, y se mantiene igualmente a lo largo del período presidencial de Carter.<sup>9</sup> Los estudios de mayor alcance realizados por el economista Edward Herman encontraron una correlación similar en todo el mundo, y sugieren además una explicación plausible: el autor constata que la ayuda guarda relación con el progreso del clima inversor, lo que no es sorprendente.

A menudo, ese progreso se consigue matando a sacerdotes y líderes sindicales, masacrando a campesinos que tratan de organizarse, eliminando a la prensa independiente, etcétera. El resultado es una correlación secundaria entre ayuda y notorias violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, sería erróneo extraer la conclusión de que los dirigentes norteamericanos (como sus homólogos de todo el mundo) prefieren la tortura; lo que ocurre es más bien que la gravedad de la tortura resulta despreciable en comparación con otros valores más importantes. Esos estudios proceden de la época de Reagan, cuando no valía la pena cuestionarse nada porque las correlaciones eran abrumadoramente evidentes.

El modelo continúa aplicándose después de la Guerra Fría. Si dejamos de lado a Israel y Egipto, que constituyen una categoría aparte, el principal receptor de ayuda estadounidense una vez terminada la Guerra Fría fue El Salvador, que, junto con Guatemala, fue el país donde tuvo lugar la violencia terrorista más extrema de los horribles años de Reagan en América Central, atribuible casi por completo a las fuerzas terroristas estatales armadas y entrenadas por Washington, como documentaron las posteriores Comisiones de la Verdad. El Congreso impidió a Washington proporcionar ayuda directa a los asesinos guatemaltecos, efusivamente elogiados por Reagan, quien tuvo que acudir a una red de terror internacional de Estados clientelares para llenar el vacío. En El Salvador, sin embargo, Estados Unidos pudo llevar a cabo la guerra terrorista sin el obstáculo de tales molestias.

Uno de los objetivos primordiales fue la Iglesia Católica, que había cometido un grave pecado: comenzar a tomarse en serio los Evangelios y adoptar «la opción preferencial por los pobres». En consecuencia, tenía que ser destruida por la violencia respaldada por Estados Unidos y con el sólido apoyo del Vaticano. La década se abrió con el asesinato del arzobispo Romero mientras decía misa, pocos días después de que hubiera enviado una carta al presidente Carter rogándole que acabara con la ayuda a la Junta asesina, ayuda que «agudiza sin duda la injusticia y la represión en contra del pueblo organizado, que muchas veces ha estado luchando por que se respeten sus derechos más fundamentales».

La ayuda no tardó en fluir, una ayuda que facilitó el camino a «una guerra de exterminio y de genocidio contra una población civil indefensa», como la describió con posterioridad el sucesor de monseñor Romero. La década terminó cuando la brigada de élite Atlacatl, armada y entrenada por Washington, hizo volar la tapa de los sesos a seis importantes intelectuales latinoamericanos, sacerdotes jesuitas, tras una sangrienta acumulación de las víctimas habituales. Pero nada de eso penetra en la conciencia de las élites de Occidente, debido a la falacia de la «mala voluntad».

Cuando Clinton asumió la presidencia, se había alcanzado ya un acuerdo político en El Salvador, de manera que este país perdió su posición de principal receptor de ayuda militar y fue reemplazado por Turquía, que por entonces estaba cometiendo algunas de las peores atrocidades de la década de 1990 en perjuicio de su población kurda, duramente oprimida. Se asesinó a decenas de miles de personas, se destruyeron 3.500 ciudades y pueblos, huyó una enorme cantidad de refugiados (tres millones, según datos de las organizaciones de derechos humanos kurdas), grandes superficies quedaron devastadas y se encarceló a los disidentes; horribles torturas y otras atrocidades fueron moneda corriente. Clinton aportó el 80% de las armas necesarias, incluso los equipos de alta tecnología que se utilizaron para perpetrar horrendos crímenes. Solo en el año 1997,

Clinton envió más ayuda militar a Turquía que la suma total de la enviada al resto de los países durante el período completo de la Guerra Fría, antes del comienzo de la campaña de contrainsurgencia. Los medios de comunicación y los comentaristas, con rarísimas excepciones, guardaron silencio.

En 1999, el terrorismo de Estado había cumplido con creces sus objetivos, de modo que la posición de principal receptora de ayuda militar que tenía Turquía fue ocupada por Colombia, país que en materia de derechos humanos presentaba, con mucha diferencia, los peores datos del hemisferio, puesto que los programas de terror coordinado entre el Estado y los paramilitares, programas que había inaugurado Kennedy, se habían cobrado un altísimo precio.

Mientras tanto, otras grandes atrocidades seguían recibiendo pleno apoyo. Una de las más extremas eran las sanciones contra los civiles iraquíes tras la demolición a gran escala del país por los bombardeos de 1991, que también destruyeron centrales eléctricas e instalaciones de aguas residuales y de potabilización, lo cual es en realidad una forma de guerra biológica. El terrible impacto de la sanciones de Estados Unidos y Gran Bretaña, formalmente puestas en práctica por Naciones Unidas, fueron objeto de tal preocupación pública que, en 1996, se introdujo una modificación humanitaria: el programa de «petróleo por alimentos», que permitía a Irak emplear los beneficios de las exportaciones de crudo para subvenir las necesidades de su sufriente población.

El primer director del programa, el eminente diplomático internacional Denis Halliday, dimitió dos años después en señal de protesta y calificó de «genocida» el programa. Fue sustituido por otro eminente diplomático internacional, Hans von Sponeck, quien dimitió dos años después denunciando el programa por violar la Convención sobre Genocidio. A la dimisión de von Sponeck le siguió de inmediato la de Jutta Burghardt, encargada del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, quien se unió a la declaración de protesta de Halliday y von Sponeck.

Para mencionar tan sólo una cifra, «durante los años en que se mantuvieron las sanciones, de 1990 a 2003, hubo un brusco incremento de la mortalidad infantil, que pasó del 56 por mil para niños de menos de cinco años a comienzos de la década de 1990, al 131 por mil para la misma franja de edad a comienzos del nuevo siglo», y «todo el mundo pudo entender fácilmente que eso era consecuencia de la sanciones económicas» (von Sponeck). Masacres de tal escala son raras, por lo que el reconocimiento de esta habría resultado doctrinariamente difícil de asumir. En consecuencia, se realizaron grandes esfuerzos para dirigir la acusación de incompetencia contra la ONU, «el mayor fraude jamás registrado en la historia» (*Wall Street Journal*). Pronto se hizo público el tremendo «fraude», pero resultó que los principales culpables eran Washington y las empresas estadounidenses. Sin embargo, las acusaciones eran demasiado graves como para permitir que se esfumaran.

Halliday y von Sponeck contaban con muchos investigadores en todo Irak, que les permitieron conocer el país mejor que ningún otro occidental. Durante la intensificación de la guerra, su tarea fue obstaculizada por los medios de comunicación estadounidenses. El Gobierno de Clinton también impidió a von Sponeck que informara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, técnicamente responsable de las consecuencias de las sanciones sobre la población. «A este hombre de Bagdad se le paga para que trabaje, no para que hable», explicó el portavoz del Departamento de Estado, James Rubin.

Evidentemente, los medios de comunicación estadounidenses y británicos estaban de acuerdo. El informe de von Sponeck sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos y Gran Bretaña, cuidadosamente documentado, se publicó en 2006, en medio de un clamoroso silencio.<sup>10</sup>

Las sanciones devastaron la sociedad civil y mataron a centenares de miles de personas, al tiempo que fortalecieron al tirano, obligaron a la población a confiar en él para sobrevivir y, probablemente, le ahorraron a este en aquel momento el destino que sufrieron otros asesinos y torturadores en masa que, hasta el final de su sangriento gobierno, contaron con el apoyo de Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados: Ceaucescu, Suharto, Mobutu, Marcos, y toda una lista de bribones a la que, regularmente, vienen a sumarse nuevos nombres. La deliberada negativa a dar a los iraquíes la oportunidad de tomar en propias manos su destino mediante la suspensión de las sanciones, como recomendaban Halliday y von Sponeck, echa por tierra el más mínimo argumento para justificar la invasión que pudieran pergeñar los apologistas de la violencia de Estado.

También sin cambios continuó durante la década de 1990 el firme apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido al general Suharto de Indonesia, «nuestro hombre», como anunció feliz el Gobierno de Clinton cuando le dio la bienvenida en Washington. Suharto había sido siempre un protegido especial de Occidente desde que tomara el poder, en 1965, presidiendo una auténtica masacre; un «rayo de luz en Asia», según informó el *New York Times*, que elogiaba además a Washington por mantener oculto su papel decisivo a fin de no molestar a los «indonesios moderados» en el gobierno.

La reacción general en Occidente fue de una no disimulada euforia tras la matanza masiva, que la CIA comparó con los crímenes de Hitler, Stalin y Mao. Suharto, que abrió la riqueza del país a la explotación de Occidente, ostenta uno de las peores historiales del mundo en materia de derechos humanos, e incluso el récord mundial de corrupción, superando con mucha diferencia a Mobutu y otros favoritos de Occidente. Además, en 1975 invadió la antigua colonia portuguesa de Timor Oriental, cometiendo así uno de los peores crímenes de finales del siglo XX, pues produjo la muerte de tal vez la cuarta parte de la población y dejó el país devastado.

Desde el primer momento, se benefició del decidido apoyo diplomático y militar norteamericano, al que se sumó el de Gran Bretaña cuando, en 1978, las atrocidades llegaron a su punto culminante, mientras otras potencias occidentales también trataban de ganar lo que pudieran con su respaldo al auténtico genocidio de Timor Oriental. El flujo de armas y entrenamiento norteamericano-británicos destinados a las unidades más perversas de la contrainsurgencia continuó sin cambios durante 1999, cuando las atrocidades indonesias experimentaron una nueva escalada, muy por encima de lo ocurrido en Kosovo antes del bombardeo de la OTAN. Australia, que disponía de información muy detallada sobre las atrocidades, también participó activamente en la formación de las unidades de élite más asesinas.

En abril de 1999, tuvo lugar una serie de masacres de particular brutalidad, como las de Liquica, donde fueron asesinadas al menos sesenta personas que se habían refugiado en una iglesia. Estados Unidos reaccionó de inmediato. El almirante Dennis Blair, comandante estadounidense del Pacífico, se reunió con el jefe del ejército indonesio, el general Wiranto, que supervisaba las atrocidades, para asegurarle el apoyo y la asistencia de Estados Unidos y proponerle una nueva misión norteamericana de formación, uno más

de los diversos contactos de ese tipo en esa época. Fuentes eclesiásticas de gran credibilidad calcularon entre 3.000 y 5.000 los muertos entre febrero y julio.

En agosto de 1999, en un referéndum dirigido por Naciones Unidas, la población votó por abrumadora mayoría a favor de la independencia, lo que constituía un notable acto de coraje. El ejército indonesio y sus socios paramilitares reaccionaron con la destrucción de Dili, la capital, y la expulsión de centenares de miles de supervivientes a las montañas. Estados Unidos y Gran Bretaña no se mostraron en absoluto impresionadas. Washington —informaba la prensa— alabó «el valor de los años de formación que se dieron a los futuros dirigentes militares de Indonesia en Estados Unidos, así como los millones de dólares destinados a la ayuda militar a Indonesia» e instó a incrementar tales acciones en ese país y en todo el mundo. Un antiguo diplomático en Yakarta explicaba sucintamente que «Indonesia importa, mientras que Timor Oriental, no». El 9 de septiembre, cuando los restos de Dili aún ardían y la población expulsada se moría de hambre en las montañas, el secretario de Defensa, William Cohen, reiteraba la posición oficial de Estados Unidos según la cual la ocupación de Timor Oriental «es responsabilidad del Gobierno de Indonesia, y no queremos arrebátársela».

Unos días después, bajo intensa presión internacional y nacional (gran parte de ella procedente de los católicos de derecha), Clinton informó discretamente a los generales indonesios de que el juego se había acabado y estos se retiraron de inmediato y permitieron la entrada en el país, sin oposición, de una fuerza de paz de Naciones Unidas comandada por Australia. La lección es más clara que el agua. Para poner fin a la agresión y al auténtico genocidio de los veinticinco años anteriores, no hubo necesidad de bombardear Yakarta, imponer sanciones ni hacer en realidad nada, salvo detener la participación activa en los crímenes. Sin embargo, por evidentes razones doctrinarias, es imposible extraer esa lección. Asombrosamente, en 1999 se reinterpretaron los acontecimientos como un notable éxito de la intervención humanitaria, lo que pone en evidencia la fascinación que ejercían las «nuevas normas» inauguradas por los «Estados ilustrados». Es inevitable preguntarse si un Estado totalitario habría podido lograr nada comparable.

El comportamiento de Gran Bretaña es aún más grotesco. El Gobierno laborista seguía entregando reactores Hawk a Indonesia incluso el 23 de septiembre de 1999, dos semanas después de la imposición de un embargo por la Unión Europea, tres días después del desembarco de la fuerza de paz australiana y bastante después de que se hubiera desvelado que esos aviones habían sido desplegados nuevamente sobre Timor Oriental, esta vez como parte de la operación de intimidación previa al referéndum. Bajo el Nuevo Partido Laborista, Gran Bretaña se convirtió en el principal proveedor de armas de Indonesia, pese a las insistentes protestas de Amnistía Internacional, disidentes indonesios y víctimas de Timor. Las razones de ello fueron enunciadas por Robin Cook, Ministro de Asuntos Exteriores y autor de la nueva «política exterior ética».

Los envíos de armas eran adecuados porque «el Gobierno está comprometido con el mantenimiento de una importante industria de defensa, factor estratégico de nuestra base industrial», lo mismo que en Estados Unidos y en todas partes. Por razones similares, el primer ministro Tony Blair aprobó la venta de repuestos a Zimbabwe, para que Mugabe utilizara los cazas británicos Hawk en una guerra civil que costó decenas de miles de vidas. No obstante, la nueva política ética supuso un progreso en relación con la de Thatcher, cuyo ministro de defensa, Alan Clark, había anunciado: «Mi responsabilidad acaba en mi

propio pueblo. No me preocupa en realidad lo que un conjunto de extranjeros le haga a otro». <sup>11</sup>

Precisamente sobre ese trasfondo, del que apenas se dan aquí unos cuantos ejemplos, el coro de admiradores intelectuales occidentales se felicitó y elogió a sus «Estados ilustrados» por abrir una nueva y alentadora época de intervención humanitaria, orientada por la «responsabilidad de proteger», ya sólo dedicada a «principios y valores», movida por el «altruismo» y el «fervor moral» bajo la única inspiración del «nuevo mundo idealista dispuesto a poner fin a la inhumanidad», ahora en una «fase noble» de su política exterior con «brillo de santidad».

El coro de autoadulación también concibió un nuevo género literario, que recriminaba a Occidente no haber sabido responder adecuadamente a los crímenes de los demás (aunque evitando cuidadosamente toda referencia a sus propios crímenes). Se lo elogió como valiente y osado. Pocos se permitieron advertir que un trabajo comparable habría sido calurosamente recibido en el Kremlin previo a la Perestroika.

El ejemplo más notable fue el trabajo ganador del apreciadísimo premio Pulitzer, «*A Problem from Hell: America and the Age of Genocide*» [Un problema del infierno: Estados Unidos y la era del genocidio], de Samantha Power, miembro del Centro Carr para Políticas de Derechos Humanos, de la Kennedy School de la Universidad de Harvard. Sería injusto decir que Power omite todos los crímenes de los Estados Unidos. Se menciona informalmente un escaso número de ellos, pero se los explica como derivados de otras preocupaciones.

Power sí presenta un caso claro: Timor Oriental, donde, como ella escribe, Washington «miró hacia otro lado», por ejemplo, al autorizar la invasión, proveer inmediatamente a Indonesia de nuevo equipamiento contrainsurgente, «inutilizar al máximo» todo esfuerzo de Naciones Unidas para poner fin a la agresión y la matanza, como recordaba con orgullo el embajador de la ONU Daniel Patrick Moynihan en la memoria de su servicio en la ONU, y luego continuar proporcionando decisivo apoyo diplomático y militar durante el cuarto de siglo siguiente, tal como se ha descrito brevemente más arriba.

En resumen, después de la caída de la Unión Soviética, la política exterior no presentó mucho más que pequeñas modificaciones tácticas. Hacían falta, no obstante, nuevos pretextos. La nueva norma de intervención humanitaria cumplía muy bien con los requisitos. Solo se necesitaba dejar de lado la vergonzosa historia de los crímenes anteriores como algo no pertinente a la comprensión de sociedades y culturas que apenas habían cambiado y enmascarar el hecho de que tales crímenes continuaban cometiéndose prácticamente sin modificaciones. Se trata de una dificultad que surge con frecuencia, aun cuando no con la misma intensidad que tras el hundimiento del pretexto habitual de los crímenes. La reacción normal es atenerse a la máxima de Tácito: «Una vez expuesto, no hay para el crimen refugio, sino sólo audacia». No se trata de negar los crímenes del pasado ni del presente; abrir esa puerta sería un grave error. Más vale borrar el pasado e ignorar el presente mientras se avanza hacia un glorioso futuro. Es esa, lamentablemente, una interpretación adecuada de los rasgos predominantes de la cultura intelectual de la era postsoviética.

Sin embargo, era imperioso encontrar, o al menos inventar, unos cuantos ejemplos para ilustrar la nueva magnificencia. Algunas elecciones fueron verdaderamente asom-

brozas. Una de las que con mayor frecuencia se invocan es la intervención humanitaria de mediados de septiembre de 1999 para rescatar a los timorenes orientales. Aunque en un primer momento el término «audacia» no atrajo la atención de esa operación, luego se abrió paso sin grandes dificultades, para dar fe, una vez más, de lo que Hans Morgenthau, el fundador de la teoría realista de las relaciones internacionales, denominó en una ocasión «nuestra subordinación conformista a quienes ejercen el poder». No hace falta perder más tiempo en tal logro.

Se intentaron otros ejemplos, también impresionantes por su audacia. Uno de los preferidos fue la intervención militar de Clinton en Haití en 1995, que puso fin, en efecto, al espantoso reino del terror que se había desencadenado con el golpe militar que en 1991 derrocara al primer presidente democráticamente elegido de Haití, Jean-Bertrand Aristide, pocos meses después de su toma de posesión. Sin embargo, para no lesionar la propia imagen, hubo que eliminar ciertos hechos desagradables.

El Gobierno de Bush I dedicó un esfuerzo considerable a debilitar el odiado régimen de Aristide y sentar las bases para el golpe militar anticipado. Luego procedería a dar su apoyo inmediato a la Junta militar y a sus acaudalados seguidores, en violación del embargo de la OEA, o, como el *New York Times* prefiere describir los hechos, a «afinar» el embargo con el fin de que no afectara a las empresas estadounidenses, para bien del pueblo haitiano. El comercio con la Junta se incrementó bajo la presidencia de Clinton, quien, también ilegalmente, autorizó a Texaco a suministrar petróleo al Gobierno de facto. Texaco era una elección natural. Fue precisamente Texaco la empresa que proveyó de petróleo al régimen de Franco a finales de los años treinta, en violación del embargo y del derecho estadounidense, mientras Washington simulaba no enterarse de la información que proporcionaba la prensa de izquierda, aunque, por supuesto, más tarde concedería discretamente que estaba al tanto de todo.

Hacia 1995, Washington consideró que el sufrimiento de los haitianos se había prolongado demasiado, así que Clinton envió *marines* para derribar a la Junta y restaurar al Gobierno electo, pero en condiciones que terminarían por destruir lo que aún quedaba de la economía haitiana. En efecto, se obligó al Gobierno restablecido a aceptar un duro programa neoliberal, sin barreras para las importaciones y las inversiones procedentes de Estados Unidos. Los arroceros haitianos son bastante eficientes, pero no pueden competir con la industria agrícola de Estados Unidos, fuertemente subsidiada, lo que condujo a su previsible hundimiento. Una pequeña y exitosa empresa producía en Haití porciones de pollo. Pero a los norteamericanos no les gusta la carne oscura, de modo que las gigantescas corporaciones que producían porciones de pollo hicieron *dumping* contra esta y otras empresas. Probaron a hacer lo mismo en México y en Canadá, pero estas son sociedades organizadas que pudieron impedir la competencia ilegal. A Haití se le había impuesto la indefensión absoluta, de modo que incluso esa pequeña industria fue a la ruina. La historia continúa e incurre en acciones aún más despreciables, que no es necesario exponer aquí.<sup>12</sup>

En resumen, Haití responde al modelo habitual; es una ilustración particularmente desafortunada de la manera en que los haitianos han sido atormentados, primero por Francia y luego por Estados Unidos, en parte como castigo por haber osado ser el primer país libre de hombres libres del hemisferio.

No tuvieron mejor suerte otros intentos de autojustificación, hasta que, finalmente, llegó el rescate de Kosovo en 1999, que abrió las compuertas. El torrente de retórica autocomplaciente se convirtió en una inundación incontrolable.

El caso de Kosovo reviste enorme significado por el sustento que brindó a la autoglorificación *in crescendo* que se daba a finales del milenio, así como por su contribución a la justificación de la proclamación occidental de su derecho a la intervención unilateral. Por tanto, no es sorprendente que el bombardeo de Kosovo por la OTAN contara con un decidido apoyo político.

La doctrina fue expuesta de modo elocuente por Vaclav Havel una vez finalizado el bombardeo. El principal periódico intelectual estadounidense, el *New York Review of Books*, liberal de izquierda, acudió a Havel en busca de «una explicación razonada» de los motivos por los que había que apoyar el bombardeo de la OTAN, y publicó su discurso ante el Parlamento canadiense, titulado «Kosovo y el fin del estado-nación» (10 de junio de 1999). Para Havel, observaba el periódico, «la guerra en Yugoslavia es un hito en las relaciones internacionales: por primera vez, los derechos humanos de un pueblo —los albanokosovares— han prevalecido inequívocamente sobre cualquier otra cosa». Lo primero que hizo Havel en su discurso fue enfatizar la enorme importancia y el extraordinario significado de la intervención en Kosovo.

Eso muestra que es posible que por fin estemos entrando en una era de verdadera ilustración, que será testigo del «fin del estado-nación», que dejará de ser la «culminación de la historia de cualquier comunidad nacional y su mayor valor terrenal», como siempre se había considerado en el pasado. Los «esfuerzos inteligentes de generaciones de demócratas, la terrible experiencia de dos guerras mundiales [...] y la evolución de la civilización han terminado por llevar a la humanidad al reconocimiento de que los seres humanos son más importantes que el Estado», como pone en evidencia la intervención en Kosovo.

La «explicación razonada» de Havel de la justicia que amparaba al bombardeo prosigue en los siguientes términos: «Hay algo que ninguna persona razonable puede negar: que probablemente sea la primera guerra que no se ha librado en nombre de “intereses nacionales”, sino más bien de principios y valores [...] [La OTAN] está luchando movida por la preocupación por el destino de los demás. Está luchando para que ninguna persona decente pueda mantenerse al margen mientras observa el asesinato sistemático de otras personas bajo la dirección del Estado [...] La Alianza ha actuado por respeto a los derechos humanos, como dictan por igual la conciencia y los documentos legales. Se trata de un precedente importante para el futuro. Se ha dicho con claridad que, simplemente, no se puede permitir que se maten personas, que se las arranque de sus hogares, se las torture y se les confisquen las propiedades».

Palabras emocionantes, aunque podrían resultar adecuadas aquí algunas precisiones: para mencionar tan solo una, no ha dejado de ser lícito, y en realidad obligatorio, no sólo tolerar ese mismo tipo de acciones, sino incluso contribuir masivamente a ellas asegurando que alcancen cotas de indignación aún más altas —dentro de la OTAN, por ejemplo— y, por supuesto, llevarlas a cabo uno mismo siempre que sea necesario.

Havel había sido un comentarista especialmente admirado de los asuntos mundiales desde 1990, cuando se dirigió a una sesión conjunta de diputados y senadores, inmediatamente después de que sus colegas de disidencia fueran brutalmente asesinados en El



Salvador (y de que Estados Unidos hubiera invadido Panamá, sembrando la muerte y la destrucción). Havel recibió una estruendosa ovación, con el público en pie, por ensalzar a la nación «defensora de la libertad» que había armado y entrenado a los asesinos de los seis destacados intelectuales jesuitas y de decenas de miles de personas más, a la que elogió por haber «comprendido la responsabilidad que emanaba» del poder y a la que instaba a continuar poniendo «la moral por delante de la política» —como había hecho durante las guerras terroristas de Reagan en América Central— y apoyar a Sudáfrica en el asesinato de alrededor de 1,5 millones de personas en países vecinos, junto a muchas otras gloriosas hazañas. La columna vertebral de nuestras acciones debe ser «la responsabilidad», aleccionaba Havel al Congreso: «responsabilidad para algo superior a mi familia, mi país, mi empresa, mi éxito».

La actuación fue recibida con éxtasis por los intelectuales liberales. Haciéndose eco de la veneración y la aprobación generales, los editores del *Washington Post* afirmaban en tono exaltado que la alabanza de Havel a nuestra nobleza constituía una «impresionante evidencia» de que su país era «una fuente primordial» de «la tradición intelectual europea», pues su voz, «voz de la conciencia», habló «de modo convincente de las responsabilidades que se deben mutuamente las grandes y las pequeñas potencias». En la extrema izquierda liberal, Anthony Lewis escribió que las palabras de Havel nos recuerdan que «vivimos en una era romántica». Una década más tarde, Lewis, todavía en los límites externos de la disidencia, se sintió conmovido y persuadido por el argumento que Havel había «expuesto con elocuencia» sobre el bombardeo de Serbia, que a su juicio había eliminado todo resto de duda acerca de la causa de Washington y señalado «un hito en las relaciones internacionales».

La observancia de la agenda política había sido estricta. Por mencionar tan solo unos cuantos ejemplos comunes, con ocasión de la independencia de Kosovo, el *Wall Street Journal* escribió que la policía y las tropas serbias «habían sido expulsadas de la provincia por la campaña de bombardeos aéreos bajo el mando de Estados Unidos [en 1999], diseñada para detener el brutal intento del dictador Slobodan Milosevich de expulsar de la provincia a la mayoría étnica albana» (25 de febrero de 2008). Francis Fukuyama insistía en el *New York Times* (17 de febrero de 2008) en que, «después del desastre de Irak», no debemos olvidar la importante lección que nos ha brindado la década de 1990, según la cual «los países fuertes, como Estados Unidos, deben utilizar su poder para defender los derechos humanos o promover la democracia»: prueba decisiva de ello es que «la limpieza étnica contra los albaneses de Kosovo sólo pudo ser detenida por el bombardeo de la propia Serbia realizado por la OTAN».

Los editores del *New Republic*, periódico liberal, escribieron que Milosevich «se propuso pacificar [Kosovo] utilizando sus instrumentos preferidos: la expulsión masiva, la violación sistemática y el asesinato»; sin embargo, y por fortuna, Occidente no toleraba el crimen «y, por eso, en marzo de 1999, la OTAN comenzó la campaña de bombardeos» para poner fin a la «matanza y el sadismo». La «pesadilla tuvo un final feliz por una única razón: porque Occidente había empleado su poder militar para salvarlos» (12 de marzo de 2008). Los editores agregaban que «habría que tener el corazón de un funcionario del Kremlin para no conmovirse ante las escenas que se habían desarrollado en Pristina, la capital de Kosovo», y saludaban «un epílogo adecuado y justo al último crimen masivo del siglo XX».

En términos menos exaltados, más convencionales, Samantha Power escribe que «las atrocidades de Serbia provocaron, naturalmente, la acción de la OTAN».

La mención de ejemplos despista, porque la doctrina es sostenida de manera prácticamente unánime, y con considerable pasión, o tal vez sería más apropiado emplear la palabra «desesperación». La referencia de los editores del *New Republic* a los «funcionarios del Kremlin» es adecuada, pero lo es por motivos ajenos a su intención. Los raros esfuerzos habidos por aducir datos concretos, incontrovertibles y bien documentados, solo han provocado impresionantes pataleos, cuando no se ha optado sencillamente por ignorarlos.

Los datos históricos de que disponemos son de una insólita riqueza, y los hechos que presentan impecables fuentes occidentales son explícitos, consistentes y están abundantemente documentados. Las fuentes incluyen dos importantes recopilaciones del Departamento de Estado, que se dieron a conocer para justificar el bombardeo, así como un profuso conjunto de documentos procedentes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la OTAN, la ONU y otras instituciones. Incluyen también una investigación del Parlamento británico. Y, de manera notable, los informes harto instructivos de los observadores de la Misión de Verificación de Kosovo de la OSCE, que se instauró con ocasión del alto el fuego negociado por el embajador norteamericano Richard Holbrooke. Los observadores informaron con regularidad sobre el terreno desde unas semanas más tarde y hasta el 19 de marzo, en que fueron retirados (por objeciones serbias) en preparación para el bombardeo del 24 de marzo.

Las pruebas documentales se tratan con lo que los antropólogos llaman «ritual de evitación». Y por una buena razón. Tales pruebas —inequívocas, por lo demás— dan al traste con las afirmaciones políticas. La pretensión común de que «las atrocidades de Serbia provocaron, naturalmente, la acción de la OTAN», invierte lisa y llanamente los hechos inequívocos: fueron las acciones de la OTAN las que provocaron las atrocidades de Serbia, exactamente como se preveía.<sup>13</sup>

La documentación occidental revela que las cosas ya estaban feas en Kosovo antes de los bombardeos (aunque, desgraciadamente, no tan feas si se las compara con lo que es la norma internacional). Los informes dicen que, en el año anterior a los bombardeos de la OTAN, unas 2.000 personas habían muerto asesinadas. Las atrocidades se repartían entre las guerrillas del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), que atacaban desde Albania, y las fuerzas de seguridad de la República Federal Yugoslava (RFY). Un informe de la OSCE resume fielmente los hechos: «en general, el ciclo de confrontación puede describirse» del siguiente modo: los ataques del ELK contra la policía y civiles serbios provocaban «una respuesta desproporcionada de las autoridades de la RPY», lo que, por su parte, daba lugar a «nuevas acciones del ELK».

El Gobierno británico, el elemento más agresivo de la alianza, atribuye la mayor parte de las atrocidades del periodo en cuestión al ELK, que en 1998 había sido condenado por los Estados Unidos como «organización terrorista». El 24 de marzo, fecha en que dieron comienzo los bombardeos, el ministro de Defensa británico, George Robertson, posterior secretario general de la OTAN, informaba en la Cámara de los Comunes que hasta mediados de enero de 1999, «[el Ejército de Liberación de Kosovo] era responsable de más muertes en Kosovo que las autoridades serbias». Citando esas declaraciones de Robertson en *A New Generation Draws the Line* [Una nueva generación traza los límites],

yo escribí que este debía de estar equivocado: dada la distribución de fuerzas, el juicio era sencillamente increíble. Sin embargo, la investigación parlamentaria británica revela que el juicio de Robertson quedó confirmado por el secretario de Asuntos Exteriores, Robin Cook, quien el 18 de enero de 1999 dijo ante la Cámara que el ELK «ha cometido más violaciones del alto el fuego, y, hasta este fin de semana, ha sido responsable de más muertes que las fuerzas de seguridad [yugoslavas]». <sup>14</sup>

Robertson y Cook hacen referencia a la masacre de Racak, el 15 de enero, en la que se informó del asesinato de cuarenta y cinco personas. La documentación occidental no pone en evidencia ningún cambio notable desde la masacre de Racak hasta la retirada de los observadores de la Misión de Verificación de Kosovo, el 19 de marzo. Así, incluso teniendo en cuenta esta masacre (y pasando por alto cuestiones relativas a lo que realmente sucedió), las conclusiones de Robertson y Cook, válidas para mediados de enero, lo siguen siendo hasta el anuncio del bombardeo de la OTAN. Una de las pocas investigaciones serias especializadas que abordan estas cuestiones, el cuidadoso y acertado estudio realizado por Nicholas Wheeler, estima que los serbios fueron responsables de 500 de las 2.000 muertes de las que se informa en el año anterior al bombardeo. En términos comparativos, Robert Hayden, especialista en los Balcanes, que dirige el Centro de Estudios Rusos y de la Europa del Este de la Universidad de Pittsburgh, observa que «las bajas entre civiles serbios durante las primeras tres semanas de guerra fueron superiores a todas las bajas de ambos bandos en Kosovo en los tres meses que condujeron a la guerra, y ya esos tres meses, desde el punto de vista humanitario, se consideraron una catástrofe». <sup>15</sup>

El servicio de inteligencia de los Estados Unidos informó que el ELK «intentaba atraer a la OTAN a su lucha por la independencia provocando las atrocidades serbias». El ELK se armaba y «daba pasos extremadamente provocativos en un esfuerzo por atraer a Occidente a la crisis», con la esperanza de forzar una brutal reacción serbia, comentaba Holbrooke. El jefe del ELK, Hashim Thaçi, hoy primer ministro de Kosovo, informaba a los investigadores de la BBC que, cuando el ELK mataba policías serbios, «sabíamos que estábamos poniendo en peligro también vidas de civiles, un gran número de vidas», pero la previsible venganza serbia hacía que las acciones valieran la pena. El supremo comandante militar del ELK, Agim Çeku, se jactaba de que el ELK había participado en la victoria porque, «después de todo, el ELK llevó la OTAN a Kosovo» por medio de ataques cuya finalidad era provocar una represalia violenta.

Así continuaron las cosas hasta que la OTAN inició los bombardeos sabiendo que era «completamente predecible» que la RFY respondería sobre el terreno con violencia, según informó a la prensa el general Wesley Clark; antes había informado a los más altos funcionarios del Gobierno norteamericano que el bombardeo conduciría a graves crímenes, y que la OTAN no podía hacer nada para evitarlos. Los detalles se ajustan a las predicciones de Clark. La prensa informaba de que «los serbios comenzaron a atacar las fortificaciones del Ejército de Liberación de Kosovo el 19 de marzo», cuando se retiró a los observadores, en preparación de los bombardeos, «pero los ataques se intensificaron el 24 de marzo, la noche en que la OTAN comenzó el bombardeo de Yugoslavia». El número de desplazados internos, que había descendido, volvió a aumentar a 200.000 tras la retirada de los observadores. Antes de los bombardeos, y durante los dos primeros días posteriores a su inicio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR) no facilitó datos sobre refugiados. Una semana después del comienzo de los bombardeos, ACNUR empezó a tabular su flujo diario.

En pocas palabras, las máximas autoridades de la OTAN comprendían claramente que los bombardeos no fueron una respuesta a las grandes atrocidades que se producían en Kosovo, sino su causa, exactamente como se preveía. Además, en el momento en que se iniciaron los bombardeos, había dos opciones diplomáticas sobre la mesa: la propuesta de la OTAN y la de la RFY (que en Occidente se omitió prácticamente sin excepción). Tras setenta y ocho días de bombardeos, se llegó a un compromiso entre ambas soluciones, lo que sugería que habría sido posible un acuerdo pacífico que habría evitado los terribles crímenes que estaba previsto que provocarían los bombardeos de la OTAN.

La acusación Milosevich de crímenes de guerra en Kosovo, formulada durante el bombardeo de la OTAN, tampoco pretendía lo contrario. La acusación, que se basaba en los servicios de inteligencia británico-estadounidenses, se limitaba a los crímenes cometidos durante los bombardeos de la OTAN. Sólo hay una excepción: la masacre de Racak de enero. «Había importantes funcionarios del Gobierno de Clinton disgustados e indignados», dice Samantha Power, repitiendo el relato convencional. Es prácticamente increíble que los funcionarios de Clinton estuvieran disgustados e indignados, o tan sólo preocupados. Aun dejando de lado su apoyo anterior a crímenes mucho peores, basta recordar su reacción ante la masacre en Timor Oriental poco antes, por ejemplo la de Liquica, crimen mucho más grave que el de Racak, que condujo a los funcionarios de Clinton a incrementar su participación en la matanza en curso.

A pesar de sus conclusiones sobre la distribución de los asesinatos, Wheeler defiende los bombardeos de la OTAN sobre la base de que, de no haber sido por estos, las atrocidades habrían sido mucho peores. El argumento es que, con aquellos bombardeos que ya se preveía que provocarían atrocidades, la OTAN *evitaba* atrocidades. El hecho de que sea ese el argumento más sólido que puede presentar los analistas serios es muy elocuente acerca de la decisión de bombardear, en particular cuando recordamos que existían también opciones diplomáticas y que el acuerdo alcanzado después del bombardeo no fue sino un compromiso entre dichas opciones.

Algunos han intentado defender tal línea de argumentación apelando a la Operación Herradura, un supuesto plan serbio para expulsar a los albanokosovares. Aunque solo sea porque el plan no era conocido por el mando de la OTAN, como atestiguó el General Clark, dicho plan carece de toda relevancia: no se puede justificar el recurso criminal a la violencia por algo que se ha descubierto con posterioridad. El plan fue presentado como una probable patraña de los servicios de inteligencia, pero eso tampoco importa demasiado. Es casi seguro que Serbia tenía tales planes para diversas contingencias, de la misma manera que otros Estados, incluido Estados Unidos, tienen planes de emergencia que ponen los pelos de punta, incluso para posibilidades remotas.

Un intento aún más asombroso de justificar el bombardeo de la OTAN es el que sostiene que la decisión se adoptó a la sombra de Srebrenica y otras atrocidades de comienzos de la década de 1990. De este argumento se sigue que la OTAN debería haber llamado a bombardear Indonesia, Estados Unidos y Gran Bretaña, en vista de atrocidades mucho peores que estos habían cometido en Timor Oriental y que volvían a incrementarse cuando se tomó la decisión de bombardear Serbia (para Estados Unidos y el Reino Unido solo una pequeña parte de su historial de crímenes). Un último y desesperado esfuerzo

por cogerse a un clavo ardiendo es creer que Europa no podía tolerar tan cerca de sus fronteras las atrocidades anteriores al bombardeo, aunque la OTAN no sólo toleró, sino que sostuvo firmemente atrocidades mucho peores en su propio seno y en los mismos años, como ya se ha expuesto.

Sin necesidad de repasar el resto de tan deprimente historia, cuesta imaginar un caso en el que la justificación del recurso a la violencia asesina fuera tan débil. Pese a ello, la absoluta justicia y nobleza de las acciones se han convertido en doctrina de fe religiosa, lo que no deja de ser comprensible, ya que ¿de qué otra manera se podría justificar el coro de autoglorificación que acompañó al final del milenio? ¿Qué otra cosa podría aducirse en apoyo de las «nuevas normas» que autorizan al Nuevo Mundo y a sus aliados, henchidos de idealismo, a emplear la fuerza allí donde sus líderes «crean que es justo hacerlo?»

Algunos han hecho conjeturas acerca de las verdaderas razones del bombardeo de la OTAN. El muy respetado historiador militar Andrew Bacevich rechaza cualquier pretensión de humanitarismo y sostiene que, junto con la intervención en Bosnia, el bombardeo de Serbia se llevó a cabo para asegurar «la cohesión de la OTAN y la credibilidad del poder estadounidense» y «para sostener la primacía de Estados Unidos» en Europa. Otro analista de renombre, Michael Lind, dice que «un importante objetivo estratégico de la guerra de Kosovo fue tranquilizar a Alemania para que no desarrollara una política de defensa independiente de la alianza de la OTAN, dominada por los Estados Unidos». Ninguno de los dos autores expone fundamento alguno de sus conclusiones.<sup>16</sup>

Sin embargo, sí que existen pruebas procedentes del más alto nivel del Gobierno de Clinton. Strobe Talbott, responsable de la diplomacia durante la guerra, escribió el prólogo de un libro sobre el conflicto del que es autor su colega John Norris. Talbott dice que los que quieran saber «de qué manera percibimos y experimentamos los acontecimientos quienes estábamos implicados» en la guerra deberían acudir al relato de Norris, escrito con la «inmediatez que solo puede proporcionar quien ha sido testigo de gran parte de la acción, ha entrevistado extensamente y en profundidad a muchos de los participantes cuando sus recuerdos aún se hallaban frescos y ha tenido acceso a gran parte de los documentos diplomáticos». Norris afirma que «es la resistencia de Yugoslavia a las tendencias más amplias de reforma política y económica —y no la difícil situación de los albanokosovares— lo que mejor explica la guerra de la OTAN». Que la motivación de los bombardeos de la OTAN no podía haber sido «la difícil situación de los albanokosovares» era algo que los extensos registros documentales de Occidente ya habían dejado claro. No obstante, es interesante enterarse, por confesión emanada del máximo nivel, de que la verdadera razón del bombardeo fue que Yugoslavia era el único país de Europa reacio a los programas políticos y económicos del Gobierno de Clinton y sus aliados. No hace falta decir que esa importante revelación también ha quedado excluida de la explicación canónica.<sup>17</sup>

A pesar de que «la nueva norma de intervención humanitaria» no resiste el examen, queda al menos un resto: la «responsabilidad de proteger». En su elogio de la declaración de independencia de Kosovo, el comentarista liberal Roger Cohen escribe que «en un nivel más profundo, la historia del pequeño Kosovo es la historia del cambio en el concepto de soberanía y la gran apertura del mundo» (*International Herald Tribune*, 20 de febrero de 2008). El bombardeo de Kosovo por la OTAN demostró que «los derechos humanos

trascendieron las estrechas pretensiones de la soberanía estatal» (cita tomada de Thomas Weiss).

Ese logro, prosigue Cohen, quedó ratificado por la Cumbre Mundial de 2005, que adoptó la «responsabilidad de proteger», conocida como «R2P», que «formalizaba la idea de que cuando un Estado se muestra incapaz o carente del deseo de proteger a su pueblo y en él se cometen crímenes contra la humanidad, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir, si es necesario, y como último recurso, con la fuerza militar». En consecuencia, «un Kosovo independiente, reconocido por las principales potencias occidentales, es en realidad el primer fruto importante de las ideas que subyacen al principio de la R2P». Cohen concluye con estas palabras: «La apertura forzada del mundo es un trabajo lento, pero que se mantiene en pie de Kosovo a Cuba». En el artículo, se reivindica el bombardeo de la OTAN y se sostiene que «el nuevo mundo idealista dispuesto a poner fin a la inhumanidad» ha llegado en realidad a una «noble fase» en su política exterior con «brillo de santidad». En palabras del profesor de derecho internacional Michael Glennon, «la crisis de Kosovo ilustra [...] la nueva voluntad de Estados Unidos de hacer lo que considera correcto, no obstante el derecho internacional», aunque unos años después el derecho internacional se armonizó con la actitud de los «Estados ilustrados» gracias a la adopción del principio de la «responsabilidad de proteger».

Una vez más, existe un pequeño problema: los molestos hechos. La Cumbre Mundial de la ONU de septiembre de 2005 *rechazó* explícitamente la pretensión de las potencias de la OTAN de tener derecho a emplear la fuerza supuestamente en protección de los derechos humanos. Muy por el contrario, la Cumbre reafirmó «que las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas [que prohíbe explícitamente las acciones de la OTAN] era suficiente para abordar toda la gama de amenazas a la paz y la seguridad internacionales». La Cumbre también reafirmó «la autoridad del Consejo de Seguridad para ordenar acciones coercitivas con el fin de mantener y restaurar la paz y la seguridad internacionales [...] actuando de acuerdo con las finalidades y los principios de la Carta», así como el papel de la Asamblea General a este respecto, «según las disposiciones pertinentes de la Carta». Por lo tanto, sin la autorización del Consejo de Seguridad, la OTAN no tiene más derecho a bombardear Serbia que el que poseía Saddam Hussein para «liberar» Kuwait. La Cumbre no garantizaba a los Estados individuales ni a las alianzas regionales ningún «derecho de intervención», ni sobre la base del humanitarismo ni con ningún otro fundamento.

La Cumbre venía a respaldar las conclusiones del Panel de Alto Nivel de la ONU de diciembre de 2004, en el que figuraban gran número de figuras prominentes del mundo occidental. El Panel reiteraba los principios de la Carta relativos al empleo de la fuerza: esta sólo se puede desplegar legalmente con autorización del Consejo de Seguridad, o de acuerdo con el artículo 51, en defensa de un ataque armado hasta que el Consejo de Seguridad se pronuncie. Cualquier otro recurso a la fuerza es un crimen de guerra, en realidad «el crimen internacional supremo» que comprende todos los males que de él derivan, en palabras del Tribunal de Núremberg. El Panel concluía que «el artículo 51 no requiere ni extensión ni restricción de su largamente entendido alcance, [...] no hay por qué reescribirlo ni reinterpretarlo». Pensando posiblemente en la guerra de Kosovo, el Panel agregó que «a quienes se impacienten por semejante respuesta, hay que decirles que en un mundo lleno de claras amenazas potenciales, el riesgo para el orden mundial, y para

la norma de no intervención que sigue siendo su fundamento, es sencillamente demasiado importante como para aceptar la legalidad de las acciones preventivas unilaterales, en oposición a las acciones que cuentan con respaldo colectivo. Permitir a uno que actúe de esa manera, es permitirsele a todos».

Difícilmente podría encontrarse un rechazo más explícito de la actitud de los auto-proclamados «Estados ilustrados».

Tanto el Panel como la Cumbre Mundial respaldaron la posición del mundo no occidental, que en la Declaración de la Cumbre del Sur del 2000, seguramente con el recuerdo del reciente bombardeo de Serbia por la OTAN, rechazó con firmeza «el llamado “derecho” de intervención humanitaria». Fue el encuentro de más alto nivel celebrado por el antiguo movimiento de no alineados, que sumaba el 80% de la población mundial. Fue ignorado casi por completo, y las escasas y breves referencias a sus conclusiones acerca de la intervención humanitaria provocaron una reacción casi histérica. Así, Brendam Simms, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Cambridge, expresaba en un artículo publicado en el *Times Higher Education Supplement* (25 de mayo de 2001) su cólera ante tan «excéntrica y acrítica reverencia por los pronunciamientos de la llamada “Primera Cumbre del Sur del G-77” –¡que se reunió en La Habana!–, chusma irresponsable con una importante representación de asesinos, torturadores y ladrones», tan distintas de aquellas gentes civilizadas que fueran sus benefactores en los siglos pasados y que apenas pueden controlar su furia ante cualquier alusión, sin comentarios, a la percepción del mundo de sus víctimas tradicionales, una percepción que después ha sido fuertemente respaldada por el Panel de alto nivel y por la Cumbre Mundial de Naciones Unidas, en abierta contradicción con los pronunciamientos interesados de los apologistas del recurso occidental a la violencia.

Finalmente, podríamos preguntarnos por la existencia misma de la intervención humanitaria. No faltan pruebas de su existencia, pruebas que comprenden dos categorías. La primera es la prueba que aportan las declaraciones de los líderes implicados. Es demasiado fácil demostrar que en la práctica todo recurso a la fuerza se justifica con una elevada retórica sobre nobles intenciones humanitarias. Los documentos de la contrainsurgencia japonesa proclaman con toda elocuencia la intención de Japón de crear un «paraíso terrenal» en el Manchugúo independiente (región de Manchuria) y en el Norte de China, donde Japón sacrifica generosamente sangre y dinero para defender a la población de los «bandidos chinos» que la aterrorizan.

Puesto que se trata de documentos internos, no tenemos ninguna razón para dudar de la sinceridad de los asesinos y torturadores en masa que los produjeron. Tal vez algún día incluso podamos dar crédito a la posibilidad de que Hirohito, el emperador japonés, fuera sincero en su declaración de rendición de agosto de 1945, cuando dijo a su pueblo: «Declaramos la guerra a Estados Unidos y Gran Bretaña movidos por Nuestro sincero deseo de asegurar la autopreservación de Japón y la estabilización del Asia Oriental, quedando muy lejos de Nuestro pensamiento tanto la violación de la soberanía de otras naciones como el afán de ampliación territorial». No menos nobles fueron los pronunciamientos de Hitler cuando desmembró Checoslovaquia, y los líderes occidentales los aceptaron en su significado literal. Summer Welles, cernano confidente del presidente Roosevelt, informó a este de que el acuerdo de Munich «era una oportunidad para que las naciones del mundo establecieran un nuevo orden sobre la base de la justicia y el

derecho», en el que los nazis «moderados» desempeñarían un papel importante. Sería difícil encontrar una excepción a todas esas declaraciones de virtuosas intenciones, incluso entre los peores monstruos.

La segunda categoría de pruebas la conforman aquellas intervenciones militares que han tenido efectos benignos, fueran cuales fueren sus motivos: no son intervenciones absolutamente humanitarias, pero sí al menos algo que se le aproxima. También de esto hay ejemplos. Los más significativos corresponden, con mucha diferencia, a la era posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, durante la década de 1960: la invasión de Pakistán Oriental (hoy Bangladesh) por la India, que puso fin a una gigantesca masacre; y la invasión de Camboya por Vietnam en diciembre de 1978, que expulsó a los Jemeres Rojos justo en el momento en que cometían sus mayores atrocidades. Sin embargo, esos dos casos deben excluirse del canon por cuestión de principios. Las invasiones no fueron realizadas por Occidente y, por lo tanto, no sirven para establecer el derecho de Occidente a emplear la fuerza violando la Carta de Naciones Unidas. Aún más decisivo es el hecho de que ambas intervenciones contaron con la sólida oposición del «idealismo del nuevo mundo dispuesto a poner fin a la inhumanidad». Los Estados Unidos enviaron portaviones a aguas indias para amenazar a los criminales. Washington apoyó una invasión china para castigar a Vietnam por el delito de haber acabado con las atrocidades de Pol Pot y, junto con Gran Bretaña, brindó de inmediato su apoyo diplomático y militar a los jemeres rojos.

El Departamento de Estado llegó incluso a dar explicaciones al Congreso de por qué apoyaba tanto a lo que quedaba del régimen de Pol Pot (Kampuchea Democrática) como a los agresores indonesios implicados en los crímenes de Timor Este, comparables a los de Pol Pot. La razón de esa notable decisión era que la «continuidad» de Kampuchea Democrática y el régimen de los jemeres rojos hacía que el gobierno fuera «indiscutiblemente más representativo del pueblo camboyano que el Fretilin [Resistencia de Timor Este] lo es del pueblo timorés». La explicación no se dio a conocer y ha sido eliminada de una historia adecuadamente saneada.

Quizá sea posible descubrir algunos casos de intervención humanitaria. Sin embargo, existen buenas razones para tomar en serio la postura de la «chusma irresponsable», una postura reafirmada por la auténtica comunidad internacional en su nivel más alto. La idea esencial quedó expresada en el voto unánime de la Corte Penal Internacional en una de sus primeras sentencias: «La Corte solo puede considerar el supuesto derecho de intervención como manifestación de una política de fuerza como la que en el pasado ha dado lugar a los más graves abusos y que, sean cuales fueren los defectos de la organización internacional, no puede hallar lugar en el derecho internacional [...]; dada la naturaleza de las cosas, [la intervención] estaría reservada a los Estados más poderosos y fácilmente podría conducir a la perversión de la propia administración de la justicia». La sentencia no se opone a «la responsabilidad de proteger», en la medida en que se la interprete de la misma manera que el Sur, el Panel de Alto Nivel de Naciones Unidas y la Cumbre Mundial de esta organización.

Sesenta años más tarde, hay pocos motivos para poner en cuestión la sentencia del tribunal. No hay duda de que el sistema de la ONU padece de graves defectos, el más grave de los cuales es el papel abrumadoramente decisivo que en él desempeñan los principales violadores de las resoluciones del Consejo de Seguridad. La manera más eficaz de violar



dichas resoluciones es vetarlas, privilegio de los miembros permanentes. Desde que, hace cuarenta años, la ONU dejó de estar bajo su control, Estados Unidos ha sido, con mucha diferencia, el miembro que más resoluciones ha vetado en una amplia gama de asuntos; su aliado británico ocupa la segunda posición, y ningún otro miembro se les acerca siquiera. No obstante, a pesar de estos y otros graves defectos del sistema de Naciones Unidas, el orden mundial del presente no ofrece ninguna alternativa mejor que la de atribuir la «responsabilidad de proteger» a las Naciones Unidas. En el mundo real, la única alternativa, como explica elocuentemente Brimont, es el «imperialismo humanitario» de los Estados poderosos, que se arrojan el derecho de emplear la fuerza porque «creen que es justo», aunque todos, con demasiada regularidad y previsibilidad, «subvierten la propia administración de la justicia».

---

## Notas

1. Cita de un alto funcionario gubernamental realizada por Thomas Friedman, jefe de corresponsales diplomáticos del *New York Times*, 12 de enero de 1992.
2. Para más datos, así como fuentes, véase Noam Chomsky, *New Military Humanism*, Common Courage, Monroe (Maine), 1999 (Ed. castellana: *El nuevo humanismo militar: lecciones de Kosovo*, Siglo XXI, Madrid, 2002).
3. *Boston Review*, febrero de 1994.
4. Para un examen detallado del papel que se asigna a China en la «virulencia y la penetración del mundialismo visionario estadounidense que subyace a la política estratégica de Washington» en Asia, véase James Peck, *Washington's China*, University of Massachusetts Press, Amherst (Massachusetts), 2006.
5. J. Patrice McSherry, *Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina*, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2009.
6. Simes, «If the Cold War Is Over, Then What?», *New York Times*, 27 de diciembre de 1988.
7. Ha-Joon Chang, *¿Qué fue del buen samaritano?: Naciones ricas, políticas pobres*, Fundación Intermón Oxfam, 2008.
8. Paráfrasis de los informadores; Stephen Kurkjian y Adam Pertman, *Boston Globe*, 5 de enero de 1990.
9. Lars Schoultz, *Human Rights and United States Policy toward Latin America*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 1981.
10. Hans C. von Sponeck, *A Different Kind of War*, Berghahn, Nueva York, 2006; *Spokesman*, nº 96, 2007. Sobre el fraude del programa petróleo por alimentos, véase Noam Chomsky, *Estados fallidos*, Ediciones B, Barcelona, 2007.
11. Para una revisión del deprimente desenlace, véase Noam Chomsky, *Una nueva generación dicta las reglas*, Editorial Crítica, Barcelona, 2002.
12. Véase Peter Hallward, *Damming the Flood: Haiti, Aristide, and the Politics of Containment*, Verso, Nueva York, 2007, un estudio experto y agudo de lo que sucedió tras el golpe militar de 2004 que, con el apoyo de los torturadores tradicionales, Francia y Estados Unidos, derrocó una vez más al Gobierno democráticamente elegido, y la resistencia del pueblo haitiano que trató de resurgir de las ruinas.
13. *Una nueva generación dicta las reglas*, op. cit. Sobre lo que se sabía, véase Noam Chomsky, *El nuevo humanismo militar*, op.cit.
14. Robertson, *New Generation*, 106-107. Cook, House of Commons Session 1999-2000, Defence Committee Publications, Part II, p. 35.
15. Wheeler, *Saving Strangers: Humanitarian Intervention and International Society*, Hayden, Oxford, 2000, entrevista a Doug Henwood, WBAI, Nueva York, reimpressa en Henwood, *Left Business Observer*, nº 89, 27 de abril de 1999.
16. Andrew J. Bacevich, *American Empire*, Harvard, Cambridge (Massachusetts), 2003; Michael Lind, *National*

## CAPÍTULO 8

*Interest*, mayo-junio de 2007.

17. John Norris, *Collision Course*, Praeger, Westport (Connecticut), 2005.